

Nº. 125 JUNIO 2018 - @cinco_ni

PERSPECTIVAS

Suplemento de análisis político



Nicaragua: la resistencia cívica que no cesa

PERSPECTIVAS es una publicación del **Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO)**, y es parte del **Observatorio de la Gobernabilidad** que desarrolla esta institución. Está bajo la responsabilidad de Sofía Montenegro. Si desea recibir la versión electrónica de este suplemento, favor dirigirse a: cinco@cinco.org.ni

Foto: Carlos Herrera



Foto: EFE

Tres meses después que iniciara la Insurrección cívica de Abril, el gobierno no ha logrado desmovilizar ni debilitar al movimiento social que le ha dado vida. Por el contrario, el movimiento se ha fortalecido. La estrategia de represión y terror del orteguismo no ha logrado disminuir las acciones ni capacidad de resistencia del movimiento, de la misma forma que tampoco ha logrado debilitar el Diálogo como el espacio para una ruta de solución pacífica y democrática a la crisis del país.

El músculo del movimiento: la resistencia activa

Indudablemente, las barricadas, los tranques y las marchas multitudinarias constituyen el músculo más vigoroso del movimiento ciudadano que ha arrinconado al gobierno Ortega-Murillo, lo ha expuesto frente al mundo como un régimen dictatorial y lo ha obligado a sentarse en una mesa de negociación. Como ya se ha mencionado antes, estas acciones y muchas otras más, son realizadas por los diferentes grupos y actores que conforman el movimiento ciudadano, entre ellos: el movimiento campesino, el movimiento estudiantil, el movimiento de mujeres, y numerosos grupos de ciudadanos en todo el país. Algunos de estos actores ya existían antes de la Insurrección cívica de Abril y otros, han emergido al calor de la contienda política. Estos actores y sus acciones son el núcleo duro de la resistencia activa ciudadana de los últimos tres meses.

En ciudades como Masaya, Nagarote, León y Jinotepe se han producido esfuerzos de organización y articulación novedosos, una vez que se avanzó de formas más espontáneas y

autoconvocadas del movimiento hacia formas más estructuradas y coordinadas entre los diferentes actores. Al menos en dos o tres de estas ciudades los niveles de coordinación y articulación han dado vida a formas autogestionadas de gobierno local para resolver necesidades inmediatas de la población como el abastecimiento y alimentación de la población, la seguridad de los protestantes y de la ciudadanía en general, y el tratamiento de la basura, entre otros.

Estos niveles de organización y coordinación hicieron posible que la ciudad de Masaya mantuviera una resistencia activa durante varias semanas hasta el 19 de junio cuando la policía en conjunto con grupos paramilitares del gobierno desató una ofensiva contra la ciudad y que tuvo como resultados varios asesinados y numerosos heridos. El 21 de junio y frente a un inminente nuevo ataque, el propio arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, junto a otros obispos de la Conferencia Episcopal, el Nuncio Apostólico y otros sacerdotes, se trasladaron a la ciudad para impedir otra masacre contra la población. A su llegada, miles de personas salieron a acompañarlos a la calle en una multitudinaria procesión que recorrió la ciudad.

Después de la masacre perpetrada durante la multitudinaria marcha del 30 de mayo en Managua, la policía y los grupos paramilitares desataron una ofensiva terrorista en las principales ciudades de todo el país a fin de atemorizar a la población, impedir que se realizaran nuevas y multitudinarias marchas y realizar acciones de represalia contra líderes del movimiento, secuestrando, torturando y levantando cargos a algunas de las personas secuestradas, mientras a otras las devuelven a sus familiares luego de permanecer ilegalmente detenidos en las cárceles de El Chipote y otras instalaciones policiales.

La escalada de violencia, represión y terror desatada por la policía y los grupos paramilitares tuvo como consecuencia que la cifra de personas asesinadas ascendiera hasta 145, de acuerdo a los registros de la ANPDH hasta el 25 de junio. Esa misma organización defensora de derechos humanos registra un total de 285 asesinatos entre el 19 de abril y la fecha señalada, de tal manera que solamente en este último mes se produjeron la mitad de los asesinatos de todo el período. Las violaciones a los derechos humanos de miles de personas también han escalado los niveles de crueldad y saña de parte de la policía y los grupos paramilitares.

Algunos de los casos que más removieron la conciencia nacional e internacional fueron el asesinato de la familia Pavón, que fue calcinada en un atroz incendio provocado por policías y paramilitares el 16 de junio en un barrio de Managua. Los policías y paramilitares encerraron a la familia dentro de la casa, le prendieron fuego e impidieron que otras personas llegaran a auxiliarlos. Cuatro adultos y dos niños menores de 3 años de edad murieron a causa del incendio. En Masaya, durante la ofensiva de policías y paramilitares contra la población, fue asesinado Marcelo Mayorga, un líder de la resistencia que buscaba refugio. Su fotografía, tendido en el suelo con una tiradora (honda) en sus manos, mientras su esposa clamaba ayuda frente a un grupo de paramilitares y policías indiferentes, también generó una ola de ira y repudio entre la sociedad nicaragüense. Días después, otro niño de 18 meses fue asesinado por grupos paramilitares en otro barrio de Managua, elevando a niveles inimaginables la saña y crueldad de los perpetradores.

A pesar de la estrategia de terror desatada por el gobierno y el alto precio que ya ha pagado la sociedad nicaragüense, el reclamo de justicia y democracia se mantiene firme, así como la resistencia. La prueba fehaciente fue la jornada de movilización y protesta que cerró el mes con la Marcha de las Flores en Managua y otras ciudades del país, así como la vigilia denominada Nicaragua Global convocadas ambas para el 30 de junio. Las marchas realizadas en Managua y otras ciudades del país fueron multitudinarias, mientras que la vigilia promovida por numerosos grupos de la diáspora nicaragüense se realizó en más de 85 ciudades en diferentes partes del mundo.

El Diálogo: espacio de búsqueda para salir de la crisis

El Diálogo Nacional ha avanzado con muchos impases a causa de los obstáculos y tácticas dilatorias del gobierno, tanto en el ple-

nario como en el trabajo de comisiones que se ha desarrollado durante el mes de junio. Los acuerdos que se han establecido son importantes y representan avances significativos del movimiento ciudadano, pero precisamente por eso, el gobierno se ha negado sistemáticamente a cumplirlos. De hecho, los únicos acuerdos cumplidos son el envío de invitaciones a organismos internacionales de derechos humanos como la CIDH, la OACNUDH, y la Unión Europea para que visiten al país. Sin embargo, el cumplimiento de este acuerdo por parte del gobierno ha sido el resultado de la presión social dentro del país y la presión de la comunidad internacional.

La dinámica del Diálogo se ha modificado y ahora además de las sesiones plenarias, incluye trabajo de comisiones. Se han conformado tres comisiones: Seguridad y Verificación; Justicia y Democratización. Desde su conformación el 16 de junio, los avances en las tres comisiones han sido pobres por varias razones: el escalamiento de la represión y violencia estatal en contra de la resistencia cívica y la población; las dilatorias del gobierno para facilitar la llegada de los organismos internacionales de derechos humanos al país; y la sistemática negativa del gobierno para abordar los temas relacionados con la democratización, específicamente la salida del gobierno de Daniel Ortega. La Conferencia Episcopal que funge como mediadora y testigo del Diálogo ha demandado en varias oportunidades a Ortega que responda a su propuesta para la democratización; sin embargo, el gobierno simplemente no se ha pronunciado al respecto.

El grupo de representantes de diversos sectores de la sociedad nicaragüense en el Diálogo también han avanzado en un proceso de construcción de consensos y organización interna a fin de prepararse para el trabajo en las Comisiones. Como resultado, el grupo ha pasado a denominarse Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. A pesar de los intentos del gobierno por generar fisuras y divisiones internas, el posicionamiento de consenso se ha mantenido y es posible observarlo en las intervenciones públicas de sus integrantes. Durante las últimas dos semanas se ha agregado una tarea adicional a la Alianza y consiste en acompañar a la Conferencia Episcopal y sacerdotes enviados para frenar las acciones de represión de la policía y los grupos paramilitares en contra de la población.

En este mes también se ha avanzado un proceso de articulación entre diferentes grupos y organizaciones de sociedad civil y la Alianza a fin de incorporar sus planteamientos y propuestas en las comisiones de trabajo del Diálogo. Las expectativas tanto de los actores y organizaciones de sociedad civil como de la sociedad nicaragüense en general, sobre la Alianza y el



Foto: Carlos Herrera

Diálogo son enormes y están mediadas por la urgencia que imponen el baño de sangre al que ha sido sometida la sociedad nicaragüense por parte de Daniel Ortega y por el mayoritario deseo de verlo fuera del gobierno. Una de las acciones que más se demanda de parte del movimiento ciudadano de resistencia es el llamado a un paro nacional por parte del sector privado, especialmente el que se encuentra representado en la Alianza Cívica. De ahí que ésta se enfrenta a varios retos: mantener los consensos internos y la integridad frente a las estrategias confrontativas y divisionistas del gobierno; mantener la credibilidad y legitimidad frente a la sociedad nicaragüense; fortalecer los espacios y canales de comunicación y articulación con las diferentes expresiones del movimiento ciudadano; y tener la capacidad de sistematizar y sintetizar las demandas, expectativas y propuestas de la sociedad nicaragüense para materializarlas en el Diálogo.

El proceso de Diálogo es complejo tanto como compleja y difícil es la ruta para la solución de la crisis política en los términos en que lo desea la mayoría de la población nicaragüense. No hay recetas ni soluciones mágicas; sin embargo y a pesar de sus impases, el Diálogo es el espacio donde se está dado una de las más fuertes disputas para lograr el cambio deseado y eso es así por dos razones: por la poca, o ninguna, voluntad de Ortega y porque la pelea por la democracia es cívica. Si la puerta del Diálogo se cierra, se cerrarían las vías pacíficas y democráticas de solución.

Nicaragua en el radar internacional

La visibilidad y solidaridad internacional también se han convertido en una acción fundamental para el movimiento ciudadano y la

Insurrección de Abril. Un papel clave ha jugado la diáspora nicaragüense que se ha activado en todo el mundo, organizándose y realizando acciones. En Estados Unidos y Europa, los niveles de organización de la diáspora nicaragüense son altos y han contribuido enormemente a informar y sensibilizar a la comunidad internacional sobre la situación del país.

Algunas de las acciones más importantes y significativas fueron, entre otras: la presencia y visibilización de la situación del país mientras se realizaba la Asamblea General de la OEA a inicios de junio. En esos días, grupos de nicaragüenses organizados en Washington, Nueva Jersey y Miami, principalmente, organizaron diversas actividades frente a la sede de la OEA; la realización de marchas y manifestaciones públicas en numerosas ciudades europeas el 10 de junio; el recorrido que un grupo de jóvenes del movimiento estudiantil han realizado por Europa y que se conoce como la Caravana Informativa de la Solidaridad y más recientemente, la vigilia realizada el 30 de junio en más de 80 ciudades del mundo al mismo tiempo que la Marcha de las Flores realizada en el país.

El nivel y la diversidad de las acciones que incluyen conciertos, pronunciamientos, incidencia ante instancias oficiales y organismos internacionales, y muchas otras actividades, ha contribuido a contrarrestar la campaña del gobierno para desprestigiar al movimiento y ha generado solidaridad en numerosos países. También han contribuido a moralizar al movimiento dentro del país y los grupos de nicaragüenses organizados en el exterior se han convertido en actores clave del propio movimiento.

La preocupación de diversos organismos internacionales de derechos humanos como la CIDH, Amnistía Internacional y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos

Humanos han sido claves para trasladar esa preocupación a los espacios oficiales, tales como la Asamblea General y el Consejo Permanente de la OEA, y el Parlamento Europeo. Particularmente importantes han sido los informes elaborados por la CIDH y Amnistía Internacional, que dan cuenta de los altos niveles de represión y violencia con los que el gobierno Ortega ha actuado en contra de la población nicaragüense, y que se han convertido en una referencia ineludible para el posicionamiento de los gobiernos, especialmente en el caso del continente americano.

Tres de los pronunciamientos oficiales más importantes han sido la Declaración de Apoyo de la OEA emitida el 5 de junio durante la Asamblea General de esa organización. Aunque el tema no estaba en agenda, la preocupación de un grupo importante de países permitió su promulgación por consenso. Más tarde, el 22 de junio, la CIDH presentó ante el Consejo Permanente de la OEA su informe definitivo de la visita que realizara a Nicaragua en mayo y la Secretaría General presentó su informe sobre los avances en el proceso de reformas electorales en las cuales ha estado trabajando con el gobierno. Aunque el canciller Denis Moncada, rechazó el informe de la CIDH, un buen grupo de países se posicionaron fuertemente en relación a la situación del país demandando respeto a los derechos humanos de los nicaragüenses y respaldando el Diálogo como mecanismo para encontrar una solución a la crisis. Especialmente firmes fueron las declaraciones de países como México, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, Chile, Argentina y Colombia, entre otros. Igualmente firme fue la resolución emitida por el Parlamento Europeo a finales de mayo, en la cual condena la represión y alienta al adelanto de las elecciones.

Estados Unidos como un actor externo que siempre ha sido considerado clave en el hemisferio, también ha tenido fuertes posicionamientos respecto al gobierno Ortega. Eso se expresó durante la Asamblea General de la OEA, cuando promovió junto con Nicaragua la declaración aprobada, así como durante la sesión del Consejo Permanente. En ambas ocasiones el representante de Estados Unidos ante el organismo expresó su preocupación y demandó medidas de presión contra el gobierno de Nicaragua.

El vicepresidente Mike Pence ha emitido declaraciones sobre el país en diferentes oportunidades y durante el mes de junio se realizaron dos visitas significativas de las que se tiene poca información: la llegada a Nicaragua el 12 de junio de Caleb McCarry, un staffer del Congreso, al que se le reconoce por ser especialista en temas de transición; y la llegada de Carlos Trujillo, embajador permanente de Estados Unidos ante la OEA el día 19 de

junio. En ambos casos, aunque se sabe que los dos funcionarios realizaron reuniones con diversos actores políticos y el mismo Daniel Ortega, no se conoce claramente el objetivo y resultado de sus visitas, lo cual ha dado pie a numerosas especulaciones. Otras acciones adicionales tomadas por el gobierno norteamericano son el retiro de visas a funcionarios y personas allegadas al gobierno y la solicitud de devolución de vehículos donados a la Policía por considerar que violaban una cláusula del convenio firmado.

La debilidad del gobierno

En la medida que el movimiento ciudadano y las acciones de resistencia se han mantenido en tiempo y se han fortalecido con mayor organización, liderazgo, coordinación y articulación, el gobierno se ha venido debilitando severamente. Su capacidad operativa policial ha disminuido sensiblemente, de tal manera que han tenido que recurrir al escalamiento de la violencia, la represión y el terror a través de acciones con participación de la policía y los grupos paramilitares. La estrategia de represión y terror ha sido la columna vertebral de las acciones gubernamentales contra el movimiento ciudadano y la han modificado cada vez que ha quedado en evidencia la firmeza y determinación de la gente. Como ya se dijo antes, en junio se arremetieron las acciones represivas y de represalia de tal manera que en este mes donde se contabiliza la mayor cantidad de personas asesinadas, heridas, detenidas arbitrariamente y desaparecidas.

Las llamadas "Caravanas del terror" están conformadas por policías, paramilitares reclutados entre retirados del Ejército y del antiguo Ministerio del Interior, y jóvenes de pandillas juveniles. Varios de ellos son francotiradores. Tal como lo señala el informe de la CIDH, estos grupos actúan en conjunto con la policía, a la vista de la policía, con la complacencia de la policía o incluso, por encima de la policía. Utilizan armas de guerra o de alto calibre, especialmente la policía y los paramilitares, mientras que los jóvenes pandilleros utilizan armas de fabricación artesanal o morteros. Se trasladan en camionetas de tina y ambulancias del sistema público de salud, a plena luz del día y utilizan pasamontañas para esconder su identidad.

En las ciudades, estos grupos se han dado a la tarea de llegar a los barrios con listas para "secuestrar" jóvenes que luego son llevados a la cárcel El Chipote en Managua, aunque sean originarios de otras ciudades. En la mayoría de los casos no hay cargos, ni órdenes de detención, además que son golpeados y cuando sus familiares los buscan, la policía no da mayor información sobre ellos. En la última semana



Foto: Carlos Herrera

de junio se conoció que muchos de estos jóvenes secuestrados han sido llevados a cárceles clandestinas. Su actuación tiene como propósito infundir terror y tomar represalias con los líderes de las protestas; sin embargo, su estrategia no ha prosperado pues el 30 de junio, la Marcha de las Flores logró una convocatoria multitudinaria en Managua y otras ciudades del país.

Las represalias también han alcanzado al sector privado, que durante las últimas semanas ha sufrido la invasión de sus propiedades por parte de cientos de personas azuzadas por el gobierno. No hay estimaciones precisas de la cantidad de propiedades que han sido afectadas hasta ahora, pero incluyen varios departamentos como Managua, León, Chinandega, Estelí, entre otros. Diferentes organizaciones de productores han rechazado este tipo de acciones y las consideran como confiscaciones de hecho, especialmente en el caso de las propiedades vinculadas a empresarios privados y productores que se han atrevido a expresar su opinión en contra del gobierno.

Otra estrategia fallida del gobierno es la de redes sociales. Luego del fracaso “informativo” de los medios de comunicación convencionales vinculados con la familia Ortega-Murillo, el gobierno orientó a sus seguidores inundar las redes sociales con mensajes; sin embargo, el discurso desarticulado y plagado de mentiras, así como la poca experiencia de sus ciber simpatizantes ha significado un enorme revés y se ha convertido en un boomerang que ha dejado al descubierto la falsedad de sus argumentos.

Los retos del movimiento

Tres meses después de iniciar la Insurrección de Abril, el movimiento ciudadano enfrenta retos importantes. El gobierno pensó, y todavía apuesta, al agotamiento de la movilización y la resistencia cívica; sin embargo, la energía ciudadana todavía parece estar lejos de agotarse. De manera que uno de los retos

más importantes consiste en mantener el nivel de movilización y presión en las calles, de tal manera que los diferentes grupos y los ciudadanos que participan en las diferentes expresiones de resistencia activa comprendan que es en ellos donde descansa la fuerza principal del movimiento.

Otro reto importante es aprovechar y potenciar la presencia de los organismos internacionales de DDHH, tanto para que la población pueda expresarse y movilizarse con mayor libertad y seguridad, como para hacer justicia a las víctimas de la represión y la violencia estatal. Esto significa que el movimiento debe disponer energías y recursos para el acompañamiento de las víctimas y el desarrollo de procesos de verdad, justicia, reparación y memoria.

Un reto más inmediato consiste en fortalecer la organización, coordinación y articulación entre los diferentes grupos que conforman la resistencia, así como las distintas expresiones del movimiento. Es decir, fortalecer las coordinaciones y articulaciones entre los grupos en resistencia, la Alianza Cívica que participa en el Diálogo y los grupos de solidaridad en el exterior.

En el caso de la Alianza y considerando el importante papel que todavía tiene el Diálogo, es importante fortalecer su capacidad de propuesta tanto en el plenario como en las comisiones o mesas de trabajo. Eso significa que se deben fortalecer los equipos de trabajo y la asistencia técnica sobre temas específicos. Igualmente, es importante fortalecer los mecanismos de comunicación y articulación con los diferentes actores del movimiento que pueden retroalimentar y aportar a la elaboración de las propuestas.

Mantener la visibilidad de la situación nacional y la presión de la comunidad internacional es también un reto significativo. Las diferentes expresiones del movimiento deben aprovechar y potenciar su participación en todos los foros, instancias y espacios que se presenten en distintas partes del mundo.